



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA.**

Tunja, veintitrés (23) de enero de dos mil veinte (2020).

Medio de control: Ejecutivo  
 Demandante: **Sergio Antonio Galindo Hoyos**  
 Demandado: Nación-Ministerio de Educación Nacional- Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.  
 Radicado: 15001 33 33 012 **2018 00249 00**

Ingresa el proceso al Despacho para resolver los recursos de reposición, y en subsidio, apelación propuestos por el apoderado de la parte actora, contra el auto de 19 de noviembre de 2019, mediante el cual se modificó la liquidación del crédito.

### I. ANTECEDENTES

Con auto de 23 de mayo de 2019 (fs. 86-92), se libró mandamiento de pago a favor del señor Sergio Antonio Galindo Olmos, en los siguientes términos:

- a. Por la suma de **un millón setecientos treinta y seis mil trescientos ochenta y cinco pesos con setenta y tres centavos (\$1.736.385,73) M/Cte.**, por concepto de intereses moratorios conforme al artículo 195 del CPACA. ordenados en la sentencia proferida por este Juzgado el día 01 de febrero de 2016, dentro del proceso radicado No. 15001 33 31 004 2015 00063. 00, desde: i) El 16 de febrero 2016 hasta el 16 mayo de 2016, ii) El 1 de noviembre de 2016 hasta el 15 de diciembre de 2016 y iii) El 16 de diciembre de 2016 hasta el 31 de mayo de 2018 (fecha inclusión en nómina de la Resolución. 009577).*
- b. Dicha suma deberá ser indexada desde el 01 de junio de 2018, día siguiente al pago parcial de las obligaciones, hasta la fecha en que se realice su pago efectivo.*

De conformidad con la sentencia proferida en audiencia de 30 de septiembre de 2019 (fs. 147-150), se ordenó seguir adelante con la ejecución a favor de Sergio Antonio Galindo Hoyos contra la Nación-Ministerio de Educación Nacional- Fondo

de Prestaciones Sociales del Magisterio, en los términos del mandamiento de pago, así:

*“SEGUNDO: Seguir adelante con la ejecución en contra de la nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en los términos señalados en el mandamiento de pago.”*

Esta decisión no fue recurrida por las partes, por lo tanto, cobró ejecutoria ese mismo día.

Mediante escrito de 10 de octubre de 2019 (fs. 152-162), la parte demandante presentó liquidación de crédito indicando los siguientes conceptos: (i) Diferencias mesadas causadas con descuento en salud desde la prescripción el 02/10/2010 a la ejecutoria de la sentencia el 15/02/2016 por la suma de \$23.730.030, ii) Indexación por valor de \$3.629.534, iii) diferencia de mesadas causadas con descuento en salud desde la ejecutoria de la sentencia el 16/02/2016 a la fecha de pago el 30/05/2018 por \$11.678.109 y iv) intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia el 16/02/2016 a la fecha de pago el 30/05/2018 por \$ 16.861.033, para un total de **\$55.898.706**, valor a los que le aplicó la deducción de \$46.891.484 del pago parcial de la obligación por parte de la entidad demandada, arrojando como suma pendiente por pagar a favor del ejecutante la de **\$9.007.222**

De esta liquidación se corrió traslado a la parte demandada, de conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 446 del CGP entre el 16 de octubre y 18 de octubre de 2019 (f. 163), término dentro del cual las mismas guardaron silencio.

Conforme a lo anterior, a través de auto de 19 de noviembre de 2019 (fs. 165-167), esta Agencia Judicial dispuso modificar la liquidación de crédito presentada por la parte demandante, en cuanto no correspondía a los valores por los cuales se ordenó seguir adelante con la ejecución, ya que se incluyeron conceptos como diferencias en mesadas pensionales causadas e indexación de las mismas.

Para efecto de evidenciar esta situación, en dicha oportunidad se indicó que en el auto de seguir adelante con la ejecución y en el que se libró mandamiento de pago ejecutivo, únicamente se ordenó el pago de los intereses moratorios desde:

de los procesos ejecutivos tramitados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

En este orden, se encuentra que con relación a la procedencia del recurso de reposición el artículo 318 del CGP, señala:

*“Artículo 318. Procedencia y oportunidades. Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen. (...)”*

De lo que se infiere su procedencia dado que no existe norma expresa que excluya al auto recurrido de reposición.

Con relación a la oportunidad para interponer el recurso de reposición respecto de autos que se profieran fuera de audiencia, según lo previsto en el inciso tercero del artículo 318 del CGP, este deberá presentarse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto.

En el caso concreto, la providencia recurrida fue notificada mediante estado de 20 de noviembre de 2019 (f. 168) y el recurso fue interpuesto el 25 de noviembre de ese mismo año (f. 169), lo que permite concluir que fue presentado de manera oportuna.

Ahora, respecto a los argumentos esbozados por la parte actora en el recurso presentado, en cuanto a la solicitud de modificar la suma a la que se concretó la obligación en consideración a que el Despacho no incluyó en la liquidación el valor de la mesada 14 devengada por el demandante, en primera medida, se advierte que conforme con lo establecido en el artículo 446 del CGP, la liquidación tiene como finalidad determinar el estado actual del crédito, determinando con exactitud el valor del capital, los intereses e indexación a que haya lugar, sin que dicha actuación implique la posibilidad de modificar las decisiones adoptadas en el decurso del proceso.

i) El 16 de febrero 2016 hasta el 16 mayo de 2016, ii) El 1 de noviembre de 2016 hasta el 15 de diciembre de 2016 y iii) El 16 de diciembre de 2016 hasta el 31 de mayo de 2018 (fecha inclusión en nómina de la Resolución. 009577) y su indexación desde el 01 de junio de 2018 hasta la fecha del pago total de la obligación, más no el de las diferencias en mesadas pensionales.

## **II. DEL RECURSO**

Mediante escrito enviado a través del correo electrónico institucional del Juzgado el 25 de noviembre de 2019 (fs. 169 -177), el demandante presentó los recursos de reposición, y en subsidio apelación, contra el auto que modificó de oficio la liquidación del crédito en el presente asunto, argumentando que al momento de realizar la liquidación, el Despacho no tuvo en cuenta el pago de la mesada 14 al accionante, de manera que el valor de las diferencias de las mesadas pensionales obtenido en la operación matemática efectuada es inferior al que en derecho corresponde, habida cuenta que se debió tener como base de capital en la liquidación de intereses la suma de \$39.037.672, arrojando como suma pendiente por pagar a favor del demandante -luego de imputado el pago parcial de la obligación- la suma de \$9.007.222.

## **III. CONSIDERACIONES**

### **3.1. Del recurso de reposición.**

Para efecto de los procesos ejecutivos en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1437 de 2011 no estableció un procedimiento especial, siendo aplicables las disposiciones del Código General del Proceso, atendiendo la remisión del artículo 306 del CPACA, de manera que los recursos presentados deberán atenderse conforme a lo dispuesto en esa normativa.

Consideración semejante realizó el H. Tribunal Administrativo de Boyacá en auto de 15 de noviembre de 2016, con ponencia del magistrado Fabio Iván Afanador García, mediante el cual se declaró desierto el recurso de apelación presentado dentro del expediente radicado número 1500133330042015-00203-01, concluyendo que en la aplicación del artículo 322 del CGP, se determinan la oportunidad y requisitos del recurso de apelación contra autos y sentencias dentro

Bajo este contexto, la Sección Tercera del Consejo de Estado<sup>1</sup> ha señalado lo siguiente:

***“el control de legalidad de la liquidación está siempre en cabeza del Juez** quién deberá analizar aquella presentada por las partes, en caso de que se presente, **sin que ello implique la posibilidad de modificar o revocar el mandamiento de pago, como quiera que se trata de una providencia judicial que se encuentra en firme**, lo que no obsta para que el total de la obligación pueda ser variado, no como consecuencia de la alteración de los parámetros establecidos en dicho auto, sino como resultado de: i). La verificación de los pagos realizados por el ejecutado, en virtud de la orden proferida en el mandamiento de pago, ii). La liquidación de los intereses de la deuda, como quiera que al inicio del proceso, el juez no tiene los elementos necesarios para determinar el monto exacto que debe pagar el ejecutado por este concepto, el cual solo se concreta al momento de la liquidación del crédito” (Resaltado del Despacho)*

De lo anterior se desprende que el juez debe efectuar el control de legalidad en la etapa de liquidación del crédito, revisando los pagos realizados y si la liquidación se ajusta a lo ordenado en el mandamiento de pago y en la providencia que ordenó seguir adelante con la ejecución. De igual manera, que en cada etapa del proceso ejecutivo se realiza el control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del trámite.

Asimismo, en cuanto al principio de preclusión de las etapas del proceso, el Consejo Estado se ha referido en los siguientes términos:

***“Este principio busca que el proceso se adelante por fases o etapas, y que una vez agotada una etapa la actuación no pueda retrotraerse, lo que en la práctica equivale a que los sujetos procesales tienen el deber de ejercer sus derechos dentro de la oportunidad***

---

<sup>1</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 8 de septiembre de 2008, expediente radicado No. 29686. M. P Ruth Stella Correa Palacio

*contemplada por el ordenamiento jurídico para cada actuación, pues si no se hace en su momento, el futuro que le espera es el de la improcedencia de la petición por extemporaneidad”<sup>2</sup> (Resaltado del Despacho)*

En este mismo sentido, el H. Tribunal Administrativo de Boyacá<sup>3</sup> ha indicado que en la en la etapa de liquidación del crédito no es posible introducir modificaciones a la sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución, en los siguientes términos:

*“como bien sabido es que **la liquidación del crédito no es el escenario procesal para reabrir el debate sobre un asunto que ya fue definido en la providencia que dio paso a la ejecución**, dado que esta fase del proceso se concreta, exclusivamente, a la determinación matemática de la cuantía de la obligación, de acuerdo con el mandamiento de pago y las respectivas modificaciones introducidas en la sentencia a la orden de apremio de que se trate. Es que las bases matemáticas con fundamento en las cuales se lleva a cabo la operación de la liquidación del crédito se han ido precisando durante el trámite del proceso; en un primer momento, con la orden que emite el juez de librar mandamiento ejecutivo y luego, en la sentencia en la que se ordena seguir adelante con la ejecución, **en ambos momentos las partes tienen la oportunidad de participar en la definición de los montos por los cuales se adelanta el cobro, para culminar con la liquidación del crédito, en el que con fundamento en las bases que se han fijado en las oportunidades anteriores, se concreta la cifra matemática financiera que el deudor debe satisfacer.**”*

Bajo este panorama, se encuentra que la manifestación efectuada por el demandante a través del recurso deprecado resulta extemporánea, habida cuenta que las oportunidades procesales dispuestas por el CGP, para debatir el monto de la obligación, los valores y factores sobre los que se determinó su liquidación, precluyeron cuando **la parte actora optó por no recurrir las decisiones adoptadas** por el Despacho, a través del auto que libró mandamiento de pago ejecutivo y la sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución.

<sup>2</sup> Consejo de Estado - Sala De Lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Auto de 21 de marzo de 2014, expediente radicado No 08001-23-33-000-2073- 00882-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

<sup>3</sup> Tribunal Administrativo de Boyacá, auto de 17 de octubre de 2019, expediente radicado No 150013333015-2016-00072-02 M.P. José Ascensión Fernández Osorio.

En consecuencia, el Despacho no accederá a lo pedido por el demandante, por cuanto en la etapa de liquidación del crédito no es posible introducir modificaciones a la sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución, en virtud del principio de preclusión de las etapas del proceso, de manera que no repondrá la decisión objeto de recurso.

### 3.2. Del recurso de apelación.

Al respecto, el Despacho observa que el numeral 3 del artículo 446 del CGP dispone lo siguiente:

*“3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por **auto que solo será apelable** cuando resuelva una objeción o **altere de oficio la cuenta respectiva**. El recurso que se tramitará en el efecto diferido, no impedirá efectuar el remate de bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de apelación.”* (Resaltado del Despacho)

Así las cosas, se concluye que contra el auto que modificó o alteró de oficio la liquidación presentada por las partes, tal como aconteció en el caso *sub examine*, procede el recurso de apelación.

Ahora, conforme a lo previsto en el artículo 322 del CGP, el Despacho advierte que el recurso de apelación se presentó de manera oportuna, toda vez que el auto mediante el cual se modificó la liquidación del crédito presentada por la parte demandante fue notificado a través de estado electrónico el 20 de noviembre del año que avanza (f. 168), es decir, que a partir del día siguiente a esta fecha, la parte demandante disponía de tres (03) días para su presentación hasta el 25 de noviembre de 2019, y el recurso fue interpuesto en esa misma fecha, como se advierte a folio 169 de las diligencias.

En consecuencia, el recurso de alzada es procedente y oportuno, luego se encuentra ajustado a las normas en cita, motivo por el cual será concedido para ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el efecto diferido.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito judicial de Tunja.

### RESUELVE

**Primero.- No reponer** el auto de 19 de noviembre de 2019, mediante el cual se modificó la liquidación del crédito presentada por la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

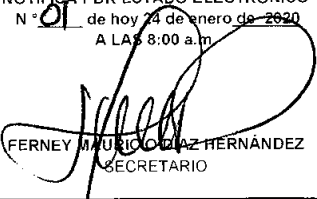
**Segundo- Conceder en efecto diferido** para ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, el recurso de apelación interpuesto y sustentado por el apoderado de la parte demandante contra el auto de 19 de noviembre de 2019, por medio del cual se modificó la liquidación del crédito presentada por la parte actora

**Tercero.-** La parte demandante dentro de los cinco (05) días siguientes a la notificación de la presente providencia, deberá suministrar al Despacho copia de todas las piezas procesales que conforman el expediente, así como del respectivo DVD de la audiencia inicial en la que se ordenó seguir adelante con la ejecución, so pena de declarar desierto el recurso presentado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 324 del CGP.

**Cuarto.-** En firme la presente providencia, por Secretaría realícese el trámite correspondiente para reparto entre los Magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá y envíese el expediente al Centro de Servicios de los Juzgados Administrativos, para su correspondiente remisión.

### Notifíquese y cúmplase

  
**ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ**  
Juez

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA
NOTIFICACIÓN POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO N° <u>01</u> de hoy 24 de enero de 2020 A LAS 8:00 a.m.
 FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ SECRETARIO

<sup>4</sup> AMRS

<sup>4</sup> Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 24 de enero de 2020, en la página web [www.poderjudicial.gov.co](http://www.poderjudicial.gov.co), Ferney Mauricio Díaz Hernández - Secretario